

Bogotá D.C, 15 enero 2026



20268600007931

15 enero 2026

Doctor

Esteban Páez Correa

DIRECTOR TERRITORIAL ATLÁNTICO - Ministerio de Transporte

epaezc@mintransporte.gov.co

BARRANQUILLA, ATLANTICO

Asunto: Devolución solicitud de concepto de sustentabilidad financiera para fijación de la capacidad transportadora – a transporte turístico nacional jb sas nit 901.954.107 – radicado st 20255341267872 del 2 de diciembre de 2025

Estimado doctor:

La Superintendencia de Transporte, en cumplimiento de sus funciones legales, ejerce acciones de promoción y prevención orientadas a acompañar a las empresas en el cumplimiento de la normatividad sectorial, sin perjuicio de sus facultades de inspección, vigilancia y control para la investigación de eventuales infracciones, todo ello en garantía del libre acceso, la seguridad y la legalidad en el transporte.

En atención a la información presentada por la empresa Transporte Turístico Nacional JB SAS y remitida por el Ministerio de Transporte bajo el radicado de la referencia, esta Superintendencia realiza el siguiente pronunciamiento:

1. Solicitud

La empresa Transporte Turístico Nacional JB SAS (NIT 901.954.107) solicitó al Ministerio de Transporte la fijación de su capacidad transportadora operacional. El Ministerio remitió la documentación respectiva a esta Superintendencia, a efectos de emitir el concepto favorable de sustentabilidad financiera conforme al artículo 2.2.1.6.7.2 y siguientes del Decreto 1079 de 2015, modificado por el Decreto 478 de 2021.

2. Consideraciones

2.1. Marco Normativo

2.1.1. Fundamentos generales

El marco regulatorio del sector transporte, y particularmente del servicio público de transporte terrestre automotor en la modalidad especial, está cimentado en normas que priorizan la seguridad y el interés general:

El artículo 2 de la Ley 336 de 1996, dispone que “la seguridad especialmente la relacionada con la protección de los usuarios, constituye prioridad esencial en la actividad del sector y del sistema de transporte.”

Por su parte el artículo 5 de la precitada ley, establece que *"el carácter de servicio público esencial bajo la regulación del Estado que la ley le otorga a la operación de las empresas de transporte público implicará la prelación del interés general sobre el particular, especialmente, en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones que señale el reglamento para cada modo."* (subraya fuera del texto)

El artículo 2.2.1.6.1. del Capítulo 6 del Decreto 1079 de 2015, respecto del servicio público de transporte terrestre automotor especial, regula y establece que el objeto del capítulo sexto del decreto en mención reglamenta *"la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial y establece los requisitos que deben cumplir las empresas interesadas en obtener y mantener la habilitación en ésta modalidad, las cuales deberán operar de forma eficiente, segura, oportuna y económica, cumpliendo con los principios rectores del transporte como el de la libre competencia y el de la iniciativa privada, a las cuales solamente se les aplicarán las restricciones establecidas por la ley y los Convenios Internacionales."* (subraya fuera del texto)

El artículo 2.2.1.6.1.2. del Decreto en mención dispone como autoridad competente de inspección, vigilancia y control de la prestación del Servicio Público de Transporte terrestre Automotor Especial a la Superintendencia de Puertos y Transporte (hoy Superintendencia de Transporte).

El numeral 9 y 14 del artículo 20 y el numeral 1 del artículo 21 del Decreto 2409 de 2018, establece como funciones a la Superintendencia de Transporte:

"Numeral 9. Implementar lineamientos para la aplicación de los mecanismos, junto con las entidades públicas ejecutoras, para solicitar la información que estime conveniente para evaluar el cumplimiento de las normas relacionadas con la debida prestación del servicio público de transporte, servicios conexos a este, así como la aplicación de las normas de tránsito"

"Numeral 14. Evaluar la situación subjetiva de las empresas encargadas de la prestación del servicio público de transporte, servicios conexos a este, así como la aplicación de las normas de tránsito."

"Artículo 21. Funciones de la Dirección de Promoción y Prevención de Tránsito y Transporte Terrestre. Son funciones de la Dirección de Promoción y Prevención de Tránsito y Transporte Terrestre, las siguientes:

Numeral 1. Adoptar los mecanismos de vigilancia subjetiva de sus vigilados, efectuando análisis tendientes a advertir una situación crítica de orden jurídico, contable, económico y/o administrativo interno de los puertos y los demás sujetos previstos en la ley."

2.1.2. Facultades respecto de la sustentabilidad financiera

De acuerdo con el inciso tercero del artículo 2.2.1.6.7.2. del Decreto 1079 del 2015, se facultó a la Superintendencia de Transporte para la emisión de los conceptos de sustentabilidad financiera, a saber:

"(...) Con el fin de fijar o incrementar la capacidad transportadora operacional, el Ministerio de Transporte solicitará a la Superintendencia de Transporte el concepto favorable de sustentabilidad financiera, para lo cual deberá enviar copia de los respectivos contratos de transporte de servicio especial presentados por la empresa de transporte de servicio especial. (...)" (subraya fuera del texto)

2.1.3. Respecto de la sustentabilidad Financiera

Respecto de la facultad de solicitar concepto favorable de sustentabilidad financiera, y a fines de dar respuesta a las preguntas planteadas por su Despacho, es pertinente precisar, en qué consiste la expresión de "sustentabilidad financiera".

La sustentabilidad financiera en una empresa de transporte terrestre especial se refiere a la capacidad de la organización para mantener y desarrollar sus operaciones de manera continua y eficiente en el tiempo, mediante una gestión responsable de los recursos financieros, que garantice el cumplimiento de sus obligaciones legales, operativas y de servicio, sin comprometer su viabilidad económica futura .

En el marco del servicio público de transporte especial en Colombia, esta sustentabilidad implica que la empresa tenga la capacidad de generar ingresos suficientes para:

- Cubrir los costos operativos (mantenimiento, combustibles, salarios, seguros),
- Atender las obligaciones legales y contractuales,
- Invertir en la mejora del servicio (vehículos, tecnología, capacitación),
- Y cumplir con los requisitos normativos y técnicos exigidos por la Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte.

En conclusión, la sustentabilidad financiera hace referencia a la suficiencia de insumos y recursos que permitan la estabilidad a mediano y largo plazo para la prestación del servicio público, y es por ello, que dentro del análisis de los documentos aportados por la empresa para comprobar que es sustentable, se examina la información financiera tanto de la empresa solicitante del concepto como con las empresas contratantes que demuestran su capacidad financiera para largo plazo.

En tal sentido, es competencia de la Superintendencia evaluar la capacidad operativa y financiera como parte de sus funciones de vigilancia, inspección y control.

El Decreto 1079 de 2015 en su capítulo 6, dispone Artículo 2.2.1.6.1 Reglamenta la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial y define los requisitos que deben cumplir las empresas para obtener y mantener la habilitación en dicha modalidad. Exige eficiencia, seguridad, oportunidad y economía; además, las empresas deberán respetar los principios de libre competencia y de iniciativa privada, únicamente restringidos por la ley y tratados internacionales.

El Artículo 2.2.1.6.1.2 Designa a la Superintendencia de Puertos y Transporte (hoy Superintendencia de Transporte) como la autoridad competente para la inspección, vigilancia y control del servicio.

El Artículo 2.2.1.6.4.1 (modificado por el D. 431/2017) Obliga a las empresas a demostrar y mantener los requisitos exigidos, así como a cumplir y desarrollar los procesos que garanticen el objeto del servicio.

Artículo 2.2.1.6.7.1 Distingue entre la capacidad transportadora global (total de vehículos requeridos para satisfacer las necesidades de movilización, según el artículo 2.2.1.6.2.1) y la capacidad transportadora operacional (número de vehículos efectivamente integrados a la flota utilizada en la prestación del servicio).

Las empresas deben acreditar la propiedad de, al menos, el 10% de los vehículos que conforman su capacidad operacional, no siendo esta inferior a un (1) equipo, permitiendo hasta un 7% mediante leasing financiero cuando corresponda.

Se establecen reglas claras respecto de la aproximación de cifras decimales, la exigencia previa de acreditación de propiedad en incrementos de capacidad, y diferenciación entre capacidad fija (vehículos propios o en leasing financiero) y flotante (vehículos de terceros debidamente vinculados) .

EL Artículo 2.2.1.6.7.2 (modificado por Decreto 478/2021) Señala que la capacidad transportadora operacional solo será fijada o incrementada cuando se acredite la sustentabilidad financiera de la operación y según el plan de rodamiento presentado.

El plan de rodamiento debe considerar el mantenimiento adecuado de los vehículos y basarse exclusivamente en los contratos de transporte, corroborando la vinculación de la flota requerida para los servicios ofertados.

En este marco, el Ministerio de Transporte está obligado a solicitar a la Superintendencia de Transporte un concepto favorable de sustentabilidad financiera, remitiendo los contratos de transporte y el plan de rodamiento como soportes técnicos y jurídicos.

Circular 25391 del Ministerio de Transporte (30 de enero de 2018) Ratifica la obligación de acreditar la sustentabilidad financiera para fijaciones e incrementos de la capacidad transportadora.

Establece que las direcciones territoriales deben remitir de manera inmediata la solicitud de concepto favorable a la Superintendencia, junto con los soportes requeridos .

Una vez habilitadas, las empresas permanecen sujetas a la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de Transporte, quien actúa en resguardo de los usuarios, propietarios y conductores. Esta etapa es permanente y exige el cumplimiento sostenido de todos los requisitos legales y operativos.

La Superintendencia de Transporte, en el marco de sus funciones de inspección, vigilancia y control, es la entidad encargada de emitir el concepto favorable de sustentabilidad financiera previa a la fijación o incremento de la capacidad transportadora operacional de las empresas de transporte terrestre automotor especial, según lo exige el artículo 2.2.1.6.7.2 del Decreto 1079 de 2015 (modificado por el Decreto 478 de 2021).

Es por ello, que la Superintendencia en el artículo 20 del Decreto 2409 de 2018, dispone como funciones del Superintendente de Tránsito y Transporte Terrestre, sin perjuicio de las que corresponden a las entidades territoriales y demás autoridades competentes la siguiente:

"...Evaluar la situación subjetiva de las empresas encargadas de la prestación del servicio público de transporte, servicios conexos a este, así como la aplicación de las normas de tránsito..."

Los numerales 1 y 5 del artículo 21 del Decreto 2409 de 2018, indica como funciones de la Dirección de Promoción y Prevención de Tránsito y Transporte Terrestre:

(...) "Adoptar los mecanismos de vigilancia subjetiva de sus vigilados, efectuando análisis tendientes a advertir una situación crítica de orden jurídico, contable, económico y/o administrativo interno de los puertos y los demás sujetos previstos en la ley.

(...)

Fomentar y desarrollar actividades tendientes al cumplimiento de las normas relacionadas con la debida prestación del servicio público de transporte, servicios conexos a este, así como la aplicación de las normas de tránsito..." (...)

3. Consideraciones de la Dirección de Promoción y Prevención

De manera integral, la Superintendencia verifica tanto el cumplimiento de los requisitos subjetivos como objetivos exigidos por la normatividad. El estudio de sustentabilidad financiera comprende el análisis detallado de los estados financieros, contratos y documentos que soportan la operación prevista.

En desarrollo de las atribuciones legales de inspección, vigilancia y control, el presente concepto se emite a partir de la documentación allegada, verificando la capacidad real de la empresa para prestar el servicio solicitado conforme a sus recursos y compromisos contractuales.

Este concepto que versa exclusivamente sobre la viabilidad financiera de la operación analizada, se basa en la verificación de la correspondencia entre los contratos presentados, el plan de rodamiento y la capacidad operacional requerida.

Se aclara que, conforme a la normatividad vigente, dicho concepto de sustentabilidad financiera no es de carácter vinculante para el Ministerio de Transporte ni constituye un acto administrativo definitivo, conservando este Ministerio la última decisión sobre la fijación o el incremento solicitado.

4. Conclusiones

A continuación, se presenta los argumentos para la subsanación de los documentos aportados para el concepto de sustentabilidad financiera:

Luego de la revisión efectuada a la información allegada y en atención a lo dispuesto por el artículo 21, numeral 1, del Decreto 2409 de 2018—que faculta a la Superintendencia para adoptar mecanismos de vigilancia subjetiva mediante análisis destinados a advertir situaciones críticas de orden jurídico, contable, económico y/o administrativo interno de los sujetos vigilados—se requiere complementar la documentación presentada:

- Con el fin de garantizar la transparencia y la sostenibilidad financiera en la ejecución del Contrato No. 0001–2025, cuyo valor mensual asciende a \$97.000.000 y cuya duración es de cinco (5) años, se solicita formalmente al señor Arlex Alberto Castro Parra la presentación de su declaración de renta correspondiente al último año gravable, en armonía con sus obligaciones tributarias bajo el régimen ordinario.

Este requerimiento resulta indispensable para verificar la consistencia de la información financiera, en la medida en que permitirá contrastar los activos totales por \$814.168.000 y la utilidad por \$68.900.000 reportados en los estados financieros certificados con corte a septiembre de 2025, frente a la información registrada ante las autoridades tributarias competentes y en los registros públicos de comercio.

Lo anterior tiene como propósito corroborar que la capacidad económica y la solidez patrimonial del contratante sean coherentes con la magnitud y el alcance financiero de la operación de transporte y turismo que se pretende desarrollar a nivel nacional, mitigando los riesgos de incumplimiento y asegurando la viabilidad financiera del contrato.

Particularmente, se hace necesario que la empresa aporte de manera completa y clara los contratos de transporte celebrados y el plan de rodamiento respectivo, soportando la correspondencia entre estos, así como la estructura de costos y los recursos financieros con que cuenta, en términos que permitan verificar la viabilidad de la operación propuesta. La ausencia o insuficiencia de estos documentos impide que la Superintendencia lleve a cabo el análisis técnico requerido para la expedición del concepto.

Por lo anterior, se procede a devolver la solicitud presentada y se solicita a la empresa subsanar los aspectos señalados y allegar la documentación conforme a los requisitos normativos dentro del plazo legal establecido. En caso de no subsanar en el término establecido en artículo 17 de la Ley 1755 de 2015, se entenderá desistida la solicitud.

5. Recomendaciones Generales

De conformidad con lo señalado previamente, es deber de las empresas habilitadas cumplir y mantener de manera permanente todos los requisitos que dieron origen a su habilitación, incluyendo la capacidad transportadora operacional. Ello resulta esencial para garantizar la adecuada prestación del servicio público de transporte, pues de ello depende la vigencia del derecho constitucional de libre circulación en el territorio nacional, bajo condiciones de seguridad, accesibilidad y protección para el usuario.

Analizada la documentación allegada, se verifica que la empresa acredita el cumplimiento exigido respecto a la propiedad del 10% de los vehículos que integrarán su parque automotor, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.6.7.1 del Decreto 1079 de 2015, dentro de la solicitud presentada para la fijación de la capacidad transportadora por primera y única vez.

En ese contexto, el concepto de sustentabilidad financiera elaborado por la Dirección de Promoción y Prevención se considera **devolución**, pues la acreditación de la capacidad transportadora operacional en esta primera oportunidad constituye un pilar fundamental para la efectiva prestación del servicio y para la salvaguarda de la vida y seguridad de los usuarios.

Es menester, resaltar que la Superintendencia de Transporte, por intermedio de la Delegatura de Tránsito, debe ejercer de manera integral sus funciones de inspección, vigilancia y control sobre las empresas del servicio público de transporte en la modalidad especial, lo que implica la verificación continua del cumplimiento tanto del Decreto 1079 de 2015 como de las demás normas aplicables al sector.

Finalmente, se deja en consideración del Director Territorial la decisión sobre la favorabilidad para la fijación de capacidad solicitada, en aras de garantizar la eficiencia, seguridad y legalidad exigidas en la prestación del servicio público de transporte.

Para dar respuesta o hacer referencia a esta comunicación en futuras ocasiones, por favor cite el radicado que encontrará en la esquina superior derecha.

Atentamente,

ANGELA PAOLA GALINDO NIETO
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN TRANSITO Y
TRANSPORTE TERRESTRE
Superintendencia de Transporte

Anexos:

- Devolución Fij. - 10%OK - Transporte Turístico Nacional SAS.pdf

Copias: dtatlantico@mintransporte.gov.co;transportenacionaljb@hotmail.com

	Nombre del funcionario	Documento Firmado Digitalmente
Proyectó y elaboró	Ana Carolina Orozco Osorio	anaorozco [15/enero/2026 02:14:36 p. m.]
Aprobó	Angela Paola Galindo Nieto	angelagalindo [15/enero/2026 03:17:14 p. m.]

Doctor
Esteban Páez Correa
Director Territorial Atlántico
Ministerio de Transporte
epaezc@mintransporte.gov.co
Barranquilla – Atlántico

Asunto: Devolución solicitud de concepto de sustentabilidad financiera para fijación de la capacidad transportadora – a Transporte Turístico Nacional JB SAS NIT 901.954.107 – Radicado ST 20255341267872 del 2 de diciembre de 2025

Estimado doctor:

La Superintendencia de Transporte, en cumplimiento de sus funciones legales, ejerce acciones de promoción y prevención orientadas a acompañar a las empresas en el cumplimiento de la normatividad sectorial, sin perjuicio de sus facultades de inspección, vigilancia y control para la investigación de eventuales infracciones, todo ello en garantía del libre acceso, la seguridad y la legalidad en el transporte.

En atención a la información presentada por la empresa Transporte Turístico Nacional JB SAS y remitida por el Ministerio de Transporte bajo el radicado de la referencia, esta Superintendencia realiza el siguiente pronunciamiento:

1. Solicitud

La empresa Transporte Turístico Nacional JB SAS (NIT 901.954.107) solicitó al Ministerio de Transporte la fijación de su capacidad transportadora operacional. El Ministerio remitió la documentación respectiva a esta Superintendencia, a efectos de emitir el concepto favorable de sustentabilidad financiera conforme al artículo 2.2.1.6.7.2 y siguientes del Decreto 1079 de 2015, modificado por el Decreto 478 de 2021.

2. Consideraciones

2.1. Marco Normativo

2.1.1. Fundamentos generales

El marco regulatorio del sector transporte, y particularmente del servicio público de transporte terrestre automotor en la modalidad especial, está cimentado en normas que priorizan la seguridad y el interés general:

El artículo 2 de la Ley 336 de 1996, dispone que “la seguridad especialmente la relacionada con la protección de los usuarios, constituye prioridad esencial en la actividad del sector y del sistema de transporte.”

Por su parte el artículo 5 de la precitada ley, establece que *"el carácter de servicio público esencial bajo la regulación del Estado que la ley le otorga a la operación de las empresas de transporte público implicará la prelación del interés general sobre el particular, especialmente, en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones que señale el reglamento para cada modo."* (subraya fuera del texto)

El artículo 2.2.1.6.1. del Capítulo 6 del Decreto 1079 de 2015, respecto del servicio público de transporte terrestre automotor especial, regula y establece que el objeto del capítulo sexto del decreto en mención reglamenta *"la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial y establece los requisitos que deben cumplir las empresas interesadas en obtener y mantener la habilitación en ésta modalidad, las cuales deberán operar de forma eficiente, segura, oportuna y económica, cumpliendo con los principios rectores del transporte como el de la libre competencia y el de la iniciativa privada, a las cuales solamente se les aplicarán las restricciones establecidas por la ley y los Convenios Internacionales."* (subraya fuera del texto)

El artículo 2.2.1.6.1.2. del Decreto en mención dispone como autoridad competente de inspección, vigilancia y control de la prestación del Servicio Público de Transporte terrestre Automotor Especial a la Superintendencia de Puertos y Transporte (hoy Superintendencia de Transporte).

El numeral 9 y 14 del artículo 20 y el numeral 1 del artículo 21 del Decreto 2409 de 2018, establece como funciones a la Superintendencia de Transporte:

"Numeral 9. Implementar lineamientos para la aplicación de los mecanismos, junto con las entidades públicas ejecutoras, para solicitar la información que estime conveniente para evaluar el cumplimiento de las normas relacionadas con la debida prestación del servicio público de transporte, servicios conexos a este, así como la aplicación de las normas de tránsito"

"Numeral 14. Evaluar la situación subjetiva de las empresas encargadas de la prestación del servicio público de transporte, servicios conexos a este, así como la aplicación de las normas de tránsito."

"Artículo 21. Funciones de la Dirección de Promoción y Prevención de Tránsito y Transporte Terrestre. Son funciones de la Dirección de Promoción y Prevención de Tránsito y Transporte Terrestre, las siguientes:

Numeral 1. Adoptar los mecanismos de vigilancia subjetiva de sus vigilados, efectuando análisis tendientes a advertir una situación crítica de orden jurídico, contable, económico y/o administrativo interno de los puertos y los demás sujetos previstos en la ley."

2.1.2. Facultades respecto de la sustentabilidad financiera

De acuerdo con el inciso tercero del artículo 2.2.1.6.7.2. del Decreto 1079 del 2015, se facultó a la Superintendencia de Transporte para la emisión de los conceptos de sustentabilidad financiera, a saber:

"(...) Con el fin de fijar o incrementar la capacidad transportadora operacional, el Ministerio de Transporte solicitará a la Superintendencia de Transporte el concepto favorable de sustentabilidad financiera, para lo cual deberá enviar copia de los respectivos contratos de transporte de servicio especial presentados por la empresa de transporte de servicio especial. (...)" (subraya fuera del texto)

2.1.3. Respecto de la sustentabilidad Financiera

Respecto de la facultad de solicitar concepto favorable de sustentabilidad financiera, y a fines de dar respuesta a las preguntas planteadas por su Despacho, es pertinente precisar, en qué consiste la expresión de "sustentabilidad financiera".

La sustentabilidad financiera en una empresa de transporte terrestre especial se refiere a la capacidad de la organización para mantener y desarrollar sus operaciones de manera continua y eficiente en el tiempo, mediante una gestión responsable de los recursos financieros, que garantice el cumplimiento de sus obligaciones legales, operativas y de servicio, sin comprometer su viabilidad económica futura .

En el marco del servicio público de transporte especial en Colombia, esta sustentabilidad implica que la empresa tenga la capacidad de generar ingresos suficientes para:

- Cubrir los costos operativos (mantenimiento, combustibles, salarios, seguros),
- Atender las obligaciones legales y contractuales,
- Invertir en la mejora del servicio (vehículos, tecnología, capacitación),
- Y cumplir con los requisitos normativos y técnicos exigidos por la Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte.

En conclusión, la sustentabilidad financiera hace referencia a la suficiencia de insumos y recursos que permitan la estabilidad a mediano y largo plazo para la prestación del servicio público, y es por ello, que dentro del análisis de los documentos aportados por la empresa para comprobar que es sustentable, se examina la información financiera tanto de la empresa solicitante del concepto como con las empresas contratantes que demuestran su capacidad financiera para largo plazo.

En tal sentido, es competencia de la Superintendencia evaluar la capacidad operativa y financiera como parte de sus funciones de vigilancia, inspección y control.

El Decreto 1079 de 2015 en su capítulo 6, dispone Artículo 2.2.1.6.1 Reglamenta la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial y define los requisitos que deben cumplir las empresas para obtener y mantener la habilitación en dicha modalidad. Exige eficiencia, seguridad, oportunidad y economía; además, las empresas deberán respetar los principios de libre competencia y de iniciativa privada, únicamente restringidos por la ley y tratados internacionales.

El Artículo 2.2.1.6.1.2 Designa a la Superintendencia de Puertos y Transporte (hoy Superintendencia de Transporte) como la autoridad competente para la inspección, vigilancia y control del servicio.

El Artículo 2.2.1.6.4.1 (modificado por el D. 431/2017) Obliga a las empresas a demostrar y mantener los requisitos exigidos, así como a cumplir y desarrollar los procesos que garanticen el objeto del servicio.

Artículo 2.2.1.6.7.1 Distingue entre la capacidad transportadora global (total de vehículos requeridos para satisfacer las necesidades de movilización, según el artículo 2.2.1.6.2.1) y la capacidad transportadora operacional (número de vehículos efectivamente integrados a la flota utilizada en la prestación del servicio).

Las empresas deben acreditar la propiedad de, al menos, el 10% de los vehículos que conforman su capacidad operacional, no siendo esta inferior a un (1) equipo, permitiendo hasta un 7% mediante leasing financiero cuando corresponda.

Se establecen reglas claras respecto de la aproximación de cifras decimales, la exigencia previa de acreditación de propiedad en incrementos de capacidad, y diferenciación entre capacidad fija (vehículos propios o en leasing financiero) y flotante (vehículos de terceros debidamente vinculados) .

EL Artículo 2.2.1.6.7.2 (modificado por Decreto 478/2021) Señala que la capacidad transportadora operacional solo será fijada o incrementada cuando se acredite la sustentabilidad financiera de la operación y según el plan de rodamiento presentado.

El plan de rodamiento debe considerar el mantenimiento adecuado de los vehículos y basarse exclusivamente en los contratos de transporte, corroborando la vinculación de la flota requerida para los servicios ofertados.

En este marco, el Ministerio de Transporte está obligado a solicitar a la Superintendencia de Transporte un concepto favorable de sustentabilidad financiera, remitiendo los contratos de transporte y el plan de rodamiento como soportes técnicos y jurídicos.

Circular 25391 del Ministerio de Transporte (30 de enero de 2018) Ratifica la obligación de acreditar la sustentabilidad financiera para fijaciones e incrementos de la capacidad transportadora.

Establece que las direcciones territoriales deben remitir de manera inmediata la solicitud de concepto favorable a la Superintendencia, junto con los soportes requeridos .

Una vez habilitadas, las empresas permanecen sujetas a la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de Transporte, quien actúa en resguardo de los usuarios, propietarios y conductores. Esta etapa es permanente y exige el cumplimiento sostenido de todos los requisitos legales y operativos.

La Superintendencia de Transporte, en el marco de sus funciones de inspección, vigilancia y control, es la entidad encargada de emitir el concepto favorable de sustentabilidad financiera previa a la fijación o incremento de la capacidad transportadora operacional de las empresas de transporte terrestre automotor especial, según lo exige el artículo 2.2.1.6.7.2 del Decreto 1079 de 2015 (modificado por el Decreto 478 de 2021).

Es por ello, que la Superintendencia en el artículo 20 del Decreto 2409 de 2018, dispone como funciones del Superintendente de Tránsito y Transporte Terrestre, sin perjuicio de las que corresponden a las entidades territoriales y demás autoridades competentes la siguiente:

"...Evaluar la situación subjetiva de las empresas encargadas de la prestación del servicio público de transporte, servicios conexos a este, así como la aplicación de las normas de tránsito..."

Los numerales 1 y 5 del artículo 21 del Decreto 2409 de 2018, indica como funciones de la Dirección de Promoción y Prevención de Tránsito y Transporte Terrestre:

(...) "Adoptar los mecanismos de vigilancia subjetiva de sus vigilados, efectuando análisis tendientes a advertir una situación crítica de orden jurídico, contable, económico y/o administrativo interno de los puertos y los demás sujetos previstos en la ley.

(...)

Fomentar y desarrollar actividades tendientes al cumplimiento de las normas relacionadas con la debida prestación del servicio público de transporte, servicios conexos a este, así como la aplicación de las normas de tránsito..." (...)

3. Consideraciones de la Dirección de Promoción y Prevención

De manera integral, la Superintendencia verifica tanto el cumplimiento de los requisitos subjetivos como objetivos exigidos por la normatividad. El estudio de sustentabilidad financiera comprende el análisis detallado de los estados financieros, contratos y documentos que soportan la operación prevista.

En desarrollo de las atribuciones legales de inspección, vigilancia y control, el presente concepto se emite a partir de la documentación allegada, verificando la capacidad real de la empresa para prestar el servicio solicitado conforme a sus recursos y compromisos contractuales.

Este concepto que versa exclusivamente sobre la viabilidad financiera de la operación analizada, se basa en la verificación de la correspondencia entre los contratos presentados, el plan de rodamiento y la capacidad operacional requerida.

Se aclara que, conforme a la normatividad vigente, dicho concepto de sustentabilidad financiera no es de carácter vinculante para el Ministerio de Transporte ni constituye un acto administrativo definitivo, conservando este Ministerio la última decisión sobre la fijación o el incremento solicitado.

4. Conclusiones

A continuación, se presenta los argumentos para la subsanación de los documentos aportados para el concepto de sustentabilidad financiera:

Luego de la revisión efectuada a la información allegada y en atención a lo dispuesto por el artículo 21, numeral 1, del Decreto 2409 de 2018—que faculta a la Superintendencia para adoptar mecanismos de vigilancia subjetiva mediante análisis destinados a advertir situaciones críticas de orden jurídico, contable, económico y/o administrativo interno de los sujetos vigilados—se requiere complementar la documentación presentada:

- Con el fin de garantizar la transparencia y la sostenibilidad financiera en la ejecución del Contrato No. 0001-2025, cuyo valor mensual asciende a \$97.000.000 y cuya duración es de cinco (5) años, se solicita formalmente al señor Arlex Alberto Castro Parra la presentación de su declaración de renta correspondiente al último año gravable, en armonía con sus obligaciones tributarias bajo el régimen ordinario.

Este requerimiento resulta indispensable para verificar la consistencia de la información financiera, en la medida en que permitirá contrastar los activos totales por \$814.168.000 y la utilidad por \$68.900.000 reportados en los estados financieros certificados con corte a septiembre de 2025, frente a la información registrada ante las autoridades tributarias competentes y en los registros públicos de comercio.

Lo anterior tiene como propósito corroborar que la capacidad económica y la solidez patrimonial del contratante sean coherentes con la magnitud y el alcance financiero de la operación de transporte y turismo que se pretende desarrollar a nivel nacional, mitigando los riesgos de incumplimiento y asegurando la viabilidad financiera del contrato.

Particularmente, se hace necesario que la empresa aporte de manera completa y clara los contratos de transporte celebrados y el plan de rodamiento respectivo, soportando la correspondencia entre estos, así como la estructura de costos y los recursos financieros con que cuenta, en términos que permitan verificar la viabilidad de la operación propuesta. La ausencia o insuficiencia de estos documentos impide que la Superintendencia lleve a cabo el análisis técnico requerido para la expedición del concepto.

Por lo anterior, se procede a devolver la solicitud presentada y se solicita a la empresa subsanar los aspectos señalados y allegar la documentación conforme a los requisitos normativos dentro del plazo legal establecido. En caso de no subsanar en el término establecido en artículo 17 de la Ley 1755 de 2015, se entenderá desistida la solicitud.

5. Recomendaciones Generales

De conformidad con lo señalado previamente, es deber de las empresas habilitadas cumplir y mantener de manera permanente todos los requisitos que dieron origen a su habilitación, incluyendo la capacidad transportadora operacional. Ello resulta esencial para garantizar la adecuada prestación del servicio público de transporte, pues de ello depende la vigencia del derecho constitucional de libre circulación en el territorio nacional, bajo condiciones de seguridad, accesibilidad y protección para el usuario.

Analizada la documentación allegada, se verifica que la empresa acredita el cumplimiento exigido respecto a la propiedad del 10% de los vehículos que integrarán su parque automotor, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.6.7.1 del Decreto 1079 de 2015, dentro de la solicitud presentada para la fijación de la capacidad transportadora por primera y única vez.

En ese contexto, el concepto de sustentabilidad financiera elaborado por la Dirección de Promoción y Prevención se considera **devolución**, pues la acreditación de la capacidad transportadora operacional en esta primera oportunidad constituye un pilar fundamental para la efectiva prestación del servicio y para la salvaguarda de la vida y seguridad de los usuarios.

Es menester, resaltar que la Superintendencia de Transporte, por intermedio de la Delegatura de Tránsito, debe ejercer de manera integral sus funciones de inspección, vigilancia y control sobre las empresas del servicio público de transporte en la modalidad especial, lo que implica la verificación continua del cumplimiento tanto del Decreto 1079 de 2015 como de las demás normas aplicables al sector.

Finalmente, se deja en consideración del Director Territorial la decisión sobre la favorabilidad para la fijación de capacidad solicitada, en aras de garantizar la eficiencia, seguridad y legalidad exigidas en la prestación del servicio público de transporte.

Para dar respuesta o hacer referencia a esta comunicación en futuras ocasiones, por favor cite el radicado que encontrará en la esquina superior derecha.

Atentamente,

 Firmado digitalmente por ANGELA PAOLA GALINDO NIETO

Angela Galindo Nieto

Directora de Promoción y Prevención de Tránsito y Transporte Terrestre

Copia: dtatlantico@mintransporte.gov.co; transportenacionaljb@hotmail.com

Bibliografía Jurídica Base:

- Ley 336 de 1996; Decreto 1079 de 2015 y sus modificaciones; Decreto 478 de 2021; Decreto 2409 de 2018; Circular 25391 del Ministerio de Transporte (2018).